



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	STEVEN ZEA PALACIO
DEMANDADA	TEÑIDOS Y ACABADOS ASOCIADOS S. A.S.
LITISCONSORTES NECESARIOS POR PASIVA	COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES CTA "COOPISER CTA", VISION HUMANA COLOMBIA S. A. S. y JUSTIME SERVICIOS S.A.S.
ORIGEN	Primero Laboral Circuito de Itagüí
RADICADO	05 360 31 05 001 – 2013-00421
TEMAS	Relación Laboral
CONOCIMIENTO	Apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 15 del Decreto 806 de 2020 se constituye en audiencia para proferir sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por STEVEN ZEA PALACIO contra TEÑIDOS Y ACABADOS ASOCIADOS S. A. S., COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES CTA "COOPISER CTA", VISION HUMANA COLOMBIA S. A. S. y JUSTIME SERVICIOS S.A.S.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda¹

El señor Steven Zea Palacio formuló demanda contra Teñidos y Acabados Asociados S. A. S., pretendiendo que i) se declare la existencia de un contrato de

¹ Fls.4/16

trabajo a término indefinido cuyos extremos fueron el 1 de enero de 2006 y el 15 de septiembre de 2013, cuando el trabajador fue despedido sin justa causa; **ii)** se declare que durante ese tiempo, la empleadora se sustrajo de cumplir con la consignación y pago de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, cotizaciones ante el Sistema de Pensiones a partir de enero de 2009. Como consecuencia de las declaraciones, pretende **iii)** pago de lo adeudado, teniendo en cuenta las vacaciones desde 2010, así como indemnización por despido, indemnización por no consignar las cesantías a un fondo, sanción moratoria por no haber liquidado el contrato a su terminación, indemnización por no haber pagado los intereses a las cesantías; **iv)** indexación del valor de la condena, y **v)** costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que laboró para la demandada, de manera ininterrumpida, entre el 1 de enero de 2006 y el 15 de septiembre de 2013, siendo vinculado mediante contrato verbal a término indefinido, como operario de manualidades, labor de alto riesgo, en razón de la cual se encargaba del proceso de desgaste o acabados de prendas de vestir (pantalones, camisas, chaquetas). Antes de configurarse el contrato verbal a término indefinido, laboró para la empresa mediante contrato escrito a término indefinido desde mayo de 2004 a diciembre de 2005, que fue liquidado. Laboró todos los años a órdenes de la demandada y en las instalaciones de ésta, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a sábado. Su último jefe directo fue Néstor León García, quien era jefe de producción.

La vinculación con la demandada no se hizo de manera directa, sino a través de terceros, quienes efectuaban los pagos de salarios, prestaciones y cotizaciones ante EPS, pretendiendo con ello despojar a Teñidos y Acabados de esas obligaciones. Se trató de Corporación Ciudadana de Servicios para los años 2008 a mediados de 2010, Logística Administrativa BPO entre agosto de 2010 y mayo de 2011, Gestión Dinámica y Proyectos entre junio y octubre de 2011, Cooperativa de Servicios Profesionales entre noviembre de 2011 y julio de 2012. Después hicieron los pagos ante la EPS, Servicios Empresariales Outsourcing y Cooperativa Multiactiva de Transportadores de Pedregal.

El pago de las cotizaciones en salud se efectuó sobre el mínimo mensual legal vigente para cada época, pero a que devengaba un valor superior, así: Para 2006: \$545.601, 2007: \$452.505, 2008: \$705.789, 2009: \$1.351.054, 2010: \$1561.320, 2011: \$2.270.184, 2012: \$1.945.714 y 2013: \$1.079.660.

El día 13 de septiembre de 2013, los trabajadores sostuvieron una reunión con los directivos de la demandada, allí se aludió a un acta transaccional que la empleadora pretendió que firmaran los trabajadores, para con ella poner fin a las dificultades que se venían presentando entre las partes. Les ofrecieron iniciar una nueva vinculación mediante contrato de trabajo a término fijo -3 meses-, con un salario mínimo, o un contrato de prestación de servicios en que la carga prestacional la asumieran ambas partes, oferta rechazada por el hoy demandante y algunos de sus compañeros, siendo esta condición para ingresar a las instalaciones, al día siguiente, no se les permitió acceder a la empresa.

No se le efectuó liquidación del contrato de trabajo, ni pago de acreencias laborales, o las diferentes indemnizaciones reclamadas con la demanda, a pesar de haber elevado reclamo escrito, recibido inicialmente por un inspector de trabajo y luego por el gerente de esta demandada.

Oposición a las pretensiones de la demanda²

Teñidos y Acabados Asociados S.A.S se opuso a las pretensiones de la demanda, por carecer de fundamentación fáctica y legal.

Aceptó que las partes estuvieron vinculadas por un contrato entre los años 2004 y 2005, que fue liquidado debidamente. Posteriormente, se presentaron las siguientes vinculaciones mediante las cuales el demandante prestó su servicio:

- Entre 2006 y diciembre de 2008 a través de Visión Humana Colombia S.A., quien liquidó sus prestaciones sociales.
- Celebró dos contratos de prestación de servicios con Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. -antes Ltda.-; iniciado el primero el 3 de enero de 2009 y el segundo, el 3 de enero de 2010.
- Se vinculó posteriormente a través de Cooperativa de Servicios Profesionales - COOPISER-, no precisa sus extremos temporales.
- Finalmente suscribió contrato de prestación de servicios con Justime Servicios S.A.S. a partir del 1 de agosto de 2012 al 15 de septiembre de 2013.

Niega subordinación del demandante respecto de esta demandada, durante el periodo que se discute en la demanda; quienes prestaban el servicio, decidieron que la vinculación se hiciera a través de terceros y cuando se hizo directamente, se cancelaron los conceptos causados. El demandante sí cumplía las funciones que menciona en la demanda, pero no a órdenes de esta demandada, siendo su último supervisor, John Jairo Peña, quien laboraba para Justime Servicios S.A.S.; el trabajador tenía libertad en el manejo de sus horarios y turnos de trabajo, pudiendo incluso faltar, sin que de ello se derivaran consecuencias adversas para él. Sus ingresos dependían de su rendimiento y eficiencia, pues quienes le contrataban le pagaban por “unidad laborada”. Aceptó que el sitio de prestación de servicios del demandante estaba ubicado en sus instalaciones, mas no hubo prestación ininterrumpida, ni recibía un salario como contraprestación, pues se trataba o bien de honorarios o compensaciones, cuando se vinculó a través de cooperativas.

En cuanto a la reunión del 13 de septiembre de 2013, aceptó su existencia, aunque no recordaba el día exacto, y fue celebrada para suscribir transacciones con quienes no laborarían más para Justime Servicios S.A.S. y decidieron iniciar labores

² Fls.146/157

directamente para Teñidos y Acabados Asociados S.A.S.; el demandante decidió no vincularse con ésta, una vez finalizó con Justime Servicios S.A.S.

Excepcionó prescripción, inexistencia de la obligación, carencia de derecho sustantivo y pago.

Por auto del 12 de marzo de 2014, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí decidió integrar como litisconsortes necesarios por pasiva a Visión Humana Colombia S.A.S., Justime Servicios S.A.S. y Cooperativa de Servicios Profesionales -COOPISER³

COOPISER se opuso a las pretensiones de la demanda, de ser dirigidas contra ella, argumentando que el demandante fue asociado a la cooperativa y desarrolló un proceso de manualidades en Tejidos y Acabados, siendo canceladas las compensaciones correspondientes, en las cuales se incluyen cesantías, intereses a las cesantías, primas y vacaciones. Canceló las cotizaciones ante la EPS durante los ciclos causados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 30 de julio de 2012. Excepcionó falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, falta de causa, ausencia de responsabilidad solidaria, buena fe, pago y ausencia de solidaridad.⁴

VISIÓN HUMANA COLOMBIA S.A.S y JUSTIME SERVICIOS S.A.S. fueron representadas por curador ad-litem, quien dijo no constarle los hechos de la demanda, ni oponerse a sus pretensiones, siempre que se acreditaran los hechos, la ausencia de pago de los conceptos laborales y el despido sin justa causa.⁵

Sentencia de primera instancia⁶

El 13 de agosto de 2015, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, profirió sentencia, declarando que entre las partes existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido entre el 31 de diciembre de 2006 y el 15 de septiembre de 2013, el cual finalizó por parte de la empleadora sin justa causa. Absolvió a las personas jurídicas llamadas como litisconsortes necesarias por pasiva.

Condenó a la demandada al pago de las siguientes sumas de dinero: Cesantías: \$ 3.428.096, intereses a las cesantías: \$168.257, primas \$1.565.641.00 y vacaciones: \$1.017.431. Igualmente ordenó el pago de \$2.832.744.00, por concepto de indemnización por despido sin justa causa y \$ 637.471 de indexación. También condenó en costas a la demandada, fijando agencias en derecho en \$1.688.687.

³ Fls.238/239.

⁴ Fls.258/260.

⁵ Fls.319/323.

⁶ Fls.335/336

Fundamentó su decisión en haberse demostrado que las diferentes personas jurídicas a través de quienes se contrató al demandante para prestar su servicio a la demandada, fueron simples intermediarias y no verdaderas empleadoras. La demandada contrataba a esas otras personas jurídicas para proveer empleados que realizaran actividades propias de su objeto, y en el caso de las cooperativas, no se demostró que el demandante hubiera solicitado asociarse, ni realizado curso de cooperativismo, ni recibido capacitaciones, ni participación de sus asambleas y menos aún de excedentes de participación. El trabajador ejecutaba las funciones en las instalaciones de la demandada, con elementos de trabajo que ella le proporcionaba.

Añade que si bien no se discuten temas relacionados con el contrato que vinculó a las partes durante los años 2000 y 2005, cuestiona por qué se modificó la forma de vinculación si realizaba las mismas funciones. Concluyó en que el objetivo era desvirtuar o desdibujar el contrato de trabajo, que los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes no tenían tal entidad, pues no se demostró la autonomía para la prestación del servicio, incumpliendo lo previsto en el art.34 del CST y tampoco que se haya tratado de un trabajador en misión. Encontró demostrado testimonialmente que el demandante no sólo prestaba el servicio en las instalaciones de la demandada, quien suministraba lo necesario para ello, sino que además tenía un jefe directo, que también laboraba para la demandada.

Estimó no probado un salario superior al mínimo mensual legal vigente para cada año, expresando que de la documental recibida no podía concluir los conceptos por los cuales el demandante percibía mayores sumas de dinero. Al radicarse la demanda el 29 de noviembre de 2013, consideró que la prescripción operó tres años atrás, salvo las cesantías, por ser exigibles al terminar el contrato, no habiendo operado respecto de ellas la prescripción. Consideró injustificada la terminación del contrato, pues se presentó como negativa a la suscripción de un nuevo contrato entre las partes, y porque la razón dada por la empresa de no estar cubierto el señor ZEA PALACIO por el sistema de Seguridad Social integral no constituye, ni configura justa causa para la terminación del contrato de trabajo.

Absolvió de la sanción moratoria, por cuanto si bien la demandada utilizó varias empresas de servicios temporales y cooperativas para eludir sus obligaciones, previamente a la demanda, tuvo intención de resolver las problemáticas laborales ofreciendo un acuerdo transaccional y un contrato de trabajo, entendiendo con ello que ha obrado de buena fe.

Finalmente se abstuvo de ordenar el pago de aportes al Sistema de Pensiones porque no fue citada al proceso la administradora ante la cual está afiliado en pensiones el demandante, siendo ella la acreedora de esas cotizaciones.

Recursos de apelación

Inconformes con la decisión, tanto el demandante como Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. la recurrieron, así:

a) Parte demandante

Pretende la revocatoria parcial de la sentencia, y en su lugar se i) tenga en cuenta el salario certificado por la demandada en la comunicación del 16 de mayo de 2012 a efectos de cuantificar la condena; ii) condene al pago de cotizaciones al Sistema de Pensiones y que las mismas se coticen sobre el salario realmente devengado; iii) condene al pago de la sanción moratoria por no haberse consignado las cesantías a un fondo año tras año, así como la causada por no cancelar la liquidación del contrato al momento de su terminación y los intereses a las cesantías doblados, por no haberlos pagado oportunamente; iv) La indexación debe entenderse causada hasta el momento en que se pague lo adeudado.

b) parte demandada

Pretende la revocatoria de la sentencia porque i) en el proceso se demostró que entre las partes existieron diferentes vinculaciones, siendo contratado el demandante por una empresa de servicios temporales, luego por prestación de servicios, luego a través de una cooperativa y finalmente a través Justime; ii) en su última vinculación era libre de escoger sus horarios de trabajo, no estando sometido jornada laboral y sumía el costo de sus equipos y elementos de seguridad industrial, siendo algunos de ellos, de propiedad de Justime. Tenía un supervisor o jefe contratado por esa sociedad. iii) el servicio no se prestó ininterrumpidamente, pues laboró entre el año 2006 y el año 2008 a través de Visión Humana Colombia, luego suscribió un contrato de prestación de servicios del 3 de enero de 2009 y otro el 3 de enero de 2010, cada uno con vigencia de un año, y cuando finalizó el contrato de prestación de servicios con Teñidos en el mes de enero 2010, y debe tenerse en cuenta que hubo una interrupción de casi 11 meses y luego se vinculó a través de un convenio asociativo de servicios con la cooperativa Coopiser el día primero de noviembre del año 2011, iv) cuando laboró para Coopiser y Visión Humana Colombia, éstas le pagaron lo correspondiente a cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, aunque se les diera un nombre diferente, bajo el concepto de prima anual, presentándose un enriquecimiento sin causa al proferirse condena en ese sentido. Finalmente, v) no se probó el despido sin justa causa, en la reunión lo que se les dijo es que no podrían ingresar sin tener seguridad social.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, la parte demandante y Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. lo recorrieron oportunamente. Las restantes personas jurídicas que conforman la pasiva, guardaron silencio.

De un lado, la parte **demandante** insiste en que se acreditó la existencia de una sola relación entre las partes, regida por un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de septiembre de 2013 cuando terminó sin justa causa por decisión de la empleadora, adeudándose los conceptos que se

reclamaron con la demanda y no sólo los reconocidos por la sentencia de primera instancia, la cual debe revocarse en los puntos que no favorecieron al demandante, liquidando las condenas que no hayan sido objeto de prescripción.

De otro lado, **Teñidos y Acabados Asociados S.A.S.** reiteró que la sentencia debe ser revocada, con fundamento en los argumentos expuestos al formular sus alegatos en primera instancia y al sustentar el recurso de apelación. Adicionalmente, indicó que obró de buena fe, pues fueron los trabajadores de la sociedad quienes pidieron ser contratados bajo otra modalidad, para que su remuneración se cancelara por prenda terminada y así manejar su tiempo y aumentar sus ingresos, no habiendo lugar a imponer sanciones que dependan de la buena o mala fe de la empleadora.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de ésta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del CPTSS.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, se tiene que el **problema jurídico** a resolver se restringe a determinar: **a)** si entre el demandante y Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. existió o no una o varias relaciones laborales regidas por uno o más contratos de trabajo, así como sus extremos temporales y si finalizó o finalizaron por causa imputable a la demandada; **b)** Si la relación terminó sin justa causa, adeudándose la correspondiente indemnización; **c)** la demandada adeuda al demandante alguna suma de dinero por concepto de vacaciones, auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, primas de servicios, indemnización por no consignación de cesantías a un fondo y indemnización moratoria por no liquidar las prestaciones sociales al finalizar el vínculo. Finalmente, se determinará **d)** si hay o no lugar a condenar a la demandada al pago de cotizaciones ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones,

En el desarrollo del primer problema jurídico planteado, se definirá igualmente si las personas jurídicas vinculadas al proceso como litisconsortes necesarias por pasiva actuaron como simples intermediarias para encubrir la verdadera relación laboral del demandante y Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. o si, por el contrario, su vinculación se desarrolló en el marco de un proceso admisible de contratación con terceros.

Hechos relevantes probados documentalmente

- Mediante comunicación fechada el 16 de mayo de 2012, Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. indica a Bancolombia que el hoy demandante, prestaba el servicio de manualidades para esa sociedad por espacio de ocho (08) años, como contratista independiente, generando ingresos promedio mensuales por \$2.120.000 (fl.30).

- Extractos de compensaciones pagadas por COOPISER durante el mes de febrero de 2012, da cuenta que se le deducía el 100% del valor de cotizaciones para salud y pensión, y que la compensación recibida era del mínimo más los retornos cooperativos (fl.31).
- Extractos de la cuenta de ahorros de la cual es titular el hoy demandante en Bancolombia, desde el primer trimestre de 2006 al 30 de septiembre de 2013 (fls.32/75).
- Documento elaborado por Bancolombia el 22 de octubre de 2013, que da cuenta de tres sumas de dinero que recibió el señor Zea Palacio por concepto de “*pago a proveedores*” por parte de Teñidos y Acabados Asociados S.A.S., el 16 de febrero de 2009 por \$171.000, el 2 de marzo de 2009 por \$392.008 y el 17 de marzo de 2009 por \$338.111 (fl.76).
- Documento elaborado por Bancolombia en que detalla las sumas de dinero recibidas por el señor Zea Palacio por concepto de “*pago de nómina*” desde el 15 de noviembre de 2006 al 16 de febrero de 2013. Los pagos fueron hechos por Visión Humana Colombia S.A., COOPISER y Justime Servicios S.A.S. (fls.77/80).
- Documento elaborado por Bancolombia el 24 de octubre de 2013, donde aclara que la suma de \$1.352.633 consignada el 28 de noviembre de 2008, obedece al concepto “*cr abono a nómina en sucursal*” y fue hecho por Teñidos y Acabados Asociados. (fl.81).
- Documento en que se aclara por parte de Bancolombia, que las consignaciones hechas a la cuenta del cual es titular el hoy demandante, el 16 de agosto de 2013, 16 de agosto de 2012, 17 de agosto de 2012, 04 de septiembre de 2012, 02 de octubre de 2012 y 17 de junio de 2013, fueron realizadas por Fabián Atehortúa O. (fls.82/83)
- A fls.84/102, 168/228 del expediente, obra copia de recibos de consignaciones realizadas al demandante desde el 16 de diciembre de 2008 al 02 de septiembre de 2013. Algunos recibos no señalan quién efectúa la consignación, otros dicen que fue “Bayron”, otras “Bayron Patiño”, otras “Teñidos y Acabados”, otras “Yeison”, otras “Yeison Atehortúa”, otras “Fabián” y otras “Andrés Herrera”⁷.
- Reporte de estado de cuenta expedido por Protección S.A. sin fecha de elaboración. Da cuenta de los diferentes empleadores que efectuaron cotizaciones a nombre del señor Zea Palacio entre el 1 de julio de 2005 y el 17 de enero de 2013 (fls.103/104).
- Certificado de Afiliación expedido el 17 de octubre de 2013 por EPS SURA que da fe que el demandante estuvo afiliado teniendo como empleadores entre otras, a las personas jurídicas que componen la pasiva (fl.105).
- Contrato de prestación de servicios (sin número) suscrito el 3 de enero de 2009 entre Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. y Steven Zea Palacio. No fija plazo de ejecución por lote, advirtiendo que depende de la necesidad del cliente, y aunque

⁷ Las glosadas a fls.168/228, no fueron realizadas exclusivamente al señor Zea Palacio, si no también a Gilberto Pérez y Ricardo Montoya Laverde, quienes no son parte en este proceso.

menciona un anexo en que se estipula el precio por manualidad, no se aportó (fls.158/160).

- Contrato de prestación de servicios N°26 suscrito el 3 de enero de 2010 entre Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. y Steven Zea Palacio. No fija plazo de ejecución por lote, advirtiendo que depende de la necesidad del cliente, y aunque menciona un anexo en que se estipula el precio por manualidad, no se aportó (fls.161/163).

- Contrato de prestación de servicios N°2012-001 suscrito el 23 de julio de 2012 entre Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. y Justime Servicios S.A.S. Su duración sería del 23 de julio de 2012 al 22 de julio de 2013, pudiéndose prorrogar automáticamente ante el silencio de las partes. se fijó igualmente cláusula de exclusividad para la prestación del servicio de manualidades contratado. (fls.164/167).

- Certificación emitida por el representante legal de Justime Services S.A.S, que da cuenta que el contrato firmado entre esa sociedad y Teñidos y acabados S.A.S. el 23 de julio de 2012 finalizó el 13 de septiembre de 2013 por mutuo acuerdo. Durante su ejecución, contrató personal como trabajadores independientes, entre los cuales se contaba el hoy demandante, a quienes señala, pagó honorarios y descontó el pago de aportes a seguridad social (fl.231)

- Propuesta y aceptación de propuesta, elevada por Visión Humana Colombia S.A. a Teñidos y Acabados Asociados S.A.S., en la que plantea la remisión de trabajadores en misión. El contrato se planteó a término indefinido. No señala cuándo iniciaría, pero la carta de aceptación a la oferta está fechada el 08 de febrero de 2006 (fls.232/237).

- Extractos de compensaciones pagadas por COOPISER al hoy demandante desde el 01 noviembre de 2011 hasta el 30 de julio de 2012, da cuenta que se le deducía para el pago de salud y pensión, y que la compensación recibida era del mínimo más los retornos cooperativos. (fls.263/280)

- Convenio Asociativo de Servicios suscrito entre el demandante y COOPISER el 01 de noviembre de 2011. Se pactó su duración por el tiempo que persista la tarea asignada o se pierda la calidad de asociado, ocurriendo lo primero el 23 de julio de 2012 (fls.281/282)

i) EXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL Y SUS EXTREMOS TEMPORALES

En torno al punto de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, los arts.23 y 24 del CST, consagran:

“ARTICULO 23. 1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

- a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.

“ARTICULO 24. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”.

Se tiene igualmente que los arts.34 y 35 del CST disponen:

“Artículo 34. 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.

“Artículo 35. 1. Son simples intermediarios, las personas que contraten servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un empleador.

2. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un empleador para el beneficio de éste y en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.

3. El que celebre contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el nombre del empleador. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el empleador de las obligaciones respectivas”.

Conforme al art.167 del CGP, incumbe al demandante demostrar su dicho, con miras obtener el pago de los derechos reclamados en la demanda. Es decir, debió acreditar la prestación personal del servicio, que percibía una remuneración por ello, y los extremos temporales alegados en la demanda; siendo del resorte de la demandada, una vez probados estos elementos, desvirtuar que la prestación del servicio se hizo de manera subordinada⁸.

Al dar respuesta al hecho tercero de la demanda, Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. aceptó que entre ella y la demandante se ejecutó un contrato de trabajo a término indefinido durante los años 2004 y 2005, ejerciendo las mismas funciones de manualidades que más adelante continuó desempeñando el demandante, advirtiéndolo que canceló lo adeudado en esa oportunidad y que es irrelevante para lo discutido en el proceso.⁹

Tal y como advierte en su apelación la parte demandante, en el documento glosado a fls.30, fechado el 16 de mayo de 2012, Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. certifica que la prestación del servicio del demandante se había dado desde el año 2004, no advirtiéndolo la existencia de la interrupción en su recurso de apelación.

Lo que sí niega desde la contestación es que esa prestación de servicio se hubiera presentado bajo su subordinación, pues en ocasiones fue como trabajador independiente, en ejecución de contratos de prestación de servicios, en otras como afiliado a una cooperativa, y en otras como trabajador en misión, ante lo cual replicó el demandante insistentemente al absolver el interrogatorio de parte, que siempre recibió órdenes de la demandada y laboró en sus instalaciones, con las herramientas por ella suministradas.

La demandada por su parte, no aportó pruebas que acreditaran la ausencia de subordinación, ni cuando contrató al demandante bajo la figura del contrato de prestación de servicios, ni cuando lo hizo a través de COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES CTA "COOPISER CTA", VISION HUMANA COLOMBIA S. A. S. y JUSTIME SERVICIOS S.A.S., las tres personas jurídicas vinculadas al proceso como litisconsorte necesarias por pasiva, todo lo contrario, los testimonios practicados en primera instancia dan cuenta de que el servicio, prestado

⁸ SL 5587 de 2018, SL 5029 de 2018 -hace a su vez transcripción parcial de la SL 6621 de 2017 y rad. 40273 de 2011, entre otras-.

⁹ Fls.8, 147

siempre en las instalaciones de la demandada, siempre estuvo supervisado, vigilado y coordinado por empleados de Teñidos y Acabados Asociados S.A.S.

Las referidas personas jurídicas, tienen naturaleza diferente, así: COOPISER es una cooperativa de trabajo asociado,¹⁰ Visión Humana Colombia S.A.S. es, según se indica en el documento glosado en fls.232/235 del expediente, una empresa de servicios temporales, condición legal que no tiene, pues en su razón social tendría las siglas EST,¹¹ y Justime Servicios S.A.S. es una sociedad anónima simplificada que tiene por objeto “el servicio de acabado de productos textiles”, “comercialización, importación, y exportación de mercancías “ y “cualquier otro objeto social lícito”¹²

Asimismo, el certificado de existencia y representación glosado a fls.121/123, da cuenta de que Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. tiene por objeto social “1. En todo lo referente a tintorería, teñido de prendas, y telas de diferentes texturas y todo lo relacionado con el lavado y proceso de tintorería”.

De ahí que la sociedad deba proveer el personal de manualidades, actividad desempeñada por el demandante no sólo durante los años 2004 y 2005, que lo hizo mediante contrato de trabajo, si no e periodos posteriores, bajo la modalidad de prestación de servicios independiente, o a través de terceros, hasta el día en que cesó la prestación del servicio; hecho éste que no es objeto de discusión entre las partes, advirtiéndose por la demandada que, si inició la contratación a través de la figura de prestación de servicios, o de la denominada tercerización laboral, fue por solicitud de sus trabajadores, lo cual, además de no haberse probado, carece de sentido lógico por tratarse de una misma labor continua, propia del objeto social de la empleadora demandada. continuo.

Defiende pues la demandada la contratación de personal a través de terceros, dejando de lado que de acuerdo con lo dispuesto en el **art.71 de la Ley 50 de 1990, art. 2 del Decreto 4369 de 2006** y art. 2.2.6.5.6. del Decreto 1072 de 2015, tal, se encuentra diseñada para la colaboración temporal en el desarrollo de sus actividades, más no puede convertirse en una conducta habitual y menos, a través de empresas cuyo objeto no parece corresponder al de EST, ni tampoco se puede atender a la contratación por prestación de servicios, cuando la continuada subordinación y dependencia, está presente en la ejecución de la relación entre las partes, como sin duda ocurrió en el caso, ni se ajustó a los casos previstos taxativamente por el art. 77 de la Ley 50 de 1990, pues no se probó la temporalidad del servicio que sólo puede durar seis meses renovable hasta por otros 6 meses,

¹⁰ Fls.243/245

¹¹ A fl.242 obra su certificado de existencia y representación legal, pero no se evidencia en él, su objeto social o que se trate de una empresa de servicios temporales, si no una S.A.S.

¹² Fls246/248.

para desarrollar labores ocasionales, accidentales o transitorias, o para reemplazar personal en vacaciones, en licencia o incapacidad por enfermedad o maternidad, o para atender el incremento a la producción; ni se probó la vinculación del hoy demandante mediante contrato de trabajo escrito como ordena la ley, circunstancias que no fueron aducidas, ni probadas en este caso.

En asuntos similares al del demandante, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha sostenido que:

«(...) la infracción de las reglas jurídicas del servicio temporal conduce a considerar al trabajador en misión como empleado directo de la empresa usuaria, vinculado mediante contrato laboral a término indefinido, con derecho a todos los beneficios que su verdadero empleador (empresa usuaria) tiene previstos en favor de sus asalariados» (CSJ SL3520-2018)¹³.

Sostuvo esa Corporación en la sentencia SL 467 de 2019:

“Desde luego que para la Corte la descentralización productiva y la tercerización, entendidas como un modo de organización de la producción en cuya virtud se hace un encargo a un tercero de determinadas partes u operaciones del proceso productivo, son un instrumento legítimo en el orden jurídico que permite a las empresas adaptarse al entorno económico y tecnológico, a fin de ser más competitivas. Sin embargo, la externalización no puede ser utilizada con fines contrarios a los derechos de los trabajadores, bien sea para deslaborizarlos o alejarlos del núcleo empresarial evitando su contratación directa o, bien sea, para desmejorarlos y debilitar su capacidad de acción individual y colectiva mediante la segmentación de las unidades.

La externalización debe estar fundada en razones objetivas técnicas y productivas, en las que se advierta la necesidad de transferir actividades que antes eran desarrolladas internamente dentro de la estructura empresarial, a un tercero, para amoldarse a los cambios de mercado, asimilar las revoluciones tecnológicas y aumentar la competencia comercial.

Cuando la descentralización no se realiza con estos propósitos organizacionales y técnicos sino para evadir la contratación directa, mediante entes interpuestos que carecen de una estructura propia y un aparato productivo especializado, y que, por tanto, se limitan a figurar como empleadores que sirven a la empresa principal, estaremos en presencia de una intermediación laboral ilegal”.

...

“Entonces, cuando bajo el pretexto de una externalización de actividades, el empresario encubre verdaderas relaciones laborales con la ayuda de aparentes contratistas, carentes de una estructura empresarial propia y entidad suficiente, cuya única razón de ser es el de proporcionar trabajadores a la principal, se estará en una simple intermediación laboral ilegal”.

En cuanto a la contratación externa, por prestación de servicios por ejemplo, ha señalado la Alta Corporación que *“para que sea válido el recurso a la contratación*

¹³ Reiterado en sentencia SL 467 de 2019.

externa, a través de un contratista independiente, la norma exige que la empresa proveedora ejecute el trabajo con sus propios medios de producción, capital, personal y asumiendo sus propios riesgos. Por ello, la jurisprudencia del trabajo ha dicho que el contratista debe tener «estructura propia y un aparato productivo especializado» (CSJ SL467-2019), es decir, tratarse de un verdadero empresario, con capacidad directiva, técnica y dueño de los medios de producción, y con empleados bajo su subordinación»¹⁴.

Esta postura de la Sala de Casación Laboral, es compartida íntegramente por esta Sala de Decisión y conduce necesariamente a que una vez analizado el acervo probatorio en cada caso particular, se estime la realidad del vínculo existente entre las partes, concluyendo en esta oportunidad, como lo hizo la A-quo, que efectivamente entre Steven Zea Palacio y Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. existió una verdadera relación laboral regida por un contrato de trabajo y no, como pretende hacerlo ver la demandada, una serie de contratos, bien de prestación de servicios, bien laborales con otros empleadores como trabajador en misión o como personal asignado por una cooperativa de trabajo asociado para un tema puntual y temporal.

Ahora bien, en cuanto a la interrupción en la prestación del servicio, alegada en la apelación por la demandada, se tiene, como ya se dijo, que es del resorte del demandante formar el convencimiento judicial en ese sentido. Para ello aportó el referido documento de fl.30, que acredita la prestación ininterrumpida del servicio por lo menos entre el 16 de mayo de 2004 y el 16 de mayo de 2012. Aunado a las declaraciones recaudadas a compañeros de labor del demandante.

En cuanto al valor probatorio de esta certificación, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha recalcado que las certificaciones emanadas del empleador o de un representante suyo, deben reputarse como ciertas y tomarse como un medio de convicción proveniente de él, a menos que el empleador demandado acredite contundentemente que lo registrado en esas constancias no se aviene a la verdad¹⁵.

En el caso la demandada no contravirtió la prueba, ni se opuso a su contenido, no la tachó de falsa ni la desvirtuó.

Téngase en cuenta que el documento obrante en fls.77/80, expedido por Bancolombia, da cuenta que el demandante recibió consignaciones por concepto de “*pago de nómina*” en momento anterior y posterior a esa fecha, reportando las quincenas subsiguientes, sin interrupción hasta el 04 de agosto de 2012. Luego reiniciaron estos pagos el 16 de octubre de 2012, nuevamente por quincenas

¹⁴ Sentencia SL4479 de 2020.

¹⁵ Sentencias rad. 8360 de 1996, SL 36748 de 2009, SL 14426 de 2014, SL 6621 de 2017 y SL21923 de 2017, entre otras.

ininterrumpidas hasta el 29 de diciembre del mismo año y una más el 16 de febrero de 2013.

Ahora bien, según la certificación de fls.231, aportada por la demandada, entre Justime Services S.A.S. y ella. Estuvo vigente el contrato que inició el 23 de julio de 2012, hasta el mes de septiembre de 2013, y para ejecutarlo, se emplearon varias personas, entre las que se cuenta el demandante, es razonable concluir que tales fechas, no hubo interrupción en la prestación del servicio del señor Zea Palacio.

Por lo dicho, considera acertada la Sala la conclusión a que arribó la señora juez de primera instancia en torno a la ininterrupción de la actividad del trabajador; no así en cuanto a los extremos temporales que encontró demostrados, pues habiéndose iniciado en el 2004 y terminado el 13 de septiembre de 2013, cuando se celebró la reunión en que se ofreció la suscripción del acuerdo transaccional, sin que mediara interrupción alguna, carece de sentido la conclusión de que el contrato inició el 31 de diciembre de 2006.

Si bien la A-quo argumenta que la fecha del contrato entre la demandada y Visión Humana Colombia S.A.S. es de febrero de 2006 sin que se pueda definir si allí inició la prestación del servicio, se tiene en fl.104 que Protección S.A. certifica el inicio para el 20 de enero de 2006 -pero se cotizaron 12 días-, pudiendo inferirse que inició el 19 de enero-, y como hay precedentes judiciales interpretando que los escasos días en que aparentemente no hay vinculación lo que se presenta en la realidad es un descanso, o disfrute de vacaciones, por tanto, en este caso, también es pertinente considerar que esos primeros 19 días de enero transcurridos luego del 31 de diciembre de 2005 cuando figuraba como empleadora la demandada, según confesión hecha al contestar a demanda y ese día, es posible atribuirlos al disfrute de vacaciones del trabajador, puesto que inició labores en el año 2004, y las sucesivas vinculaciones así fueran a través de terceros en buena parte se convenían por un término de un año.

Al no haberse demostrado la satisfacción de acreencias laborales por parte de la demandada, debe ordenarse su pago, pues si bien hay soportes que reflejan el pago de algunos conceptos por parte de COOPISER, en especial *“compensación ordinaria”*, *“compensaciones finales”* y *“retorno cooperativo”*, los que la demandada pretende hacer valer como el pago de vacaciones, primas, cesantías e intereses a las cesantías, lo cierto es que ninguno de esos conceptos es equivalente en su naturaleza a lo reclamado en la demanda y tampoco se demostró que con esos pagos se pretendiera cubrirlo.

No habiéndose recurrido la prescripción ordenada en la sentencia apelada, interpreta la Sala que ambas partes están conformes con la decisión, por ende, se liquidarán los diferentes conceptos, teniendo en cuenta que se encuentran

prescritos los causados con anterioridad al 29 de noviembre de 2010, salvo las vacaciones, para las cuales lo están las causadas con anterioridad al 29 de noviembre de 2009 y las cesantías, respecto de las cuales no operó la prescripción.

En cuanto al salario base para calcular los diferentes conceptos, se tiene que el documento glosado en fl.30 establece que el promedio de lo devengado para 2012 ascendió a \$2.120.000, siendo improbable, en sana lógica, que, ejecutando la misma función, antes y después de esa fecha, devengara un salario mínimo mensual legal vigente para cada época, como concluyó la A-quo, menos aún si se considera que el demandado adujo que modificó la modalidad de contratación a petición de los trabajadores porque así se les garantizaría mayores ingresos.

Se tomará este salario para el año 2012 y para los anteriores años, el confesado por el demandante en el hecho 28 de la demanda (fl.12), salvo por el mencionado para el año 2011, por ser superior al de \$2.120.000, certificado para 2012. Para ese año se tomará el del año inmediatamente anterior. Para 2007 se tomará el de 2006 y para 2013 se tomará el del año 2012, dado que no existe razón para puede disminuirse el salario previamente percibido. Como se desconoce la remuneración percibida durante los dos primeros años, se asumirá el devengado para el año 2006. Todo lo anterior, por no acreditarse unos salarios diferentes y no ser procedente la interpretación contraria a los intereses del trabajador que se propuso en la sentencia recurrida:

2004: \$545.601

2005: \$545.601

2006: \$545.601

2007: \$545.601

2008: \$705.789

2009: \$1.351.054

2010: \$1.561.320

2011: \$1.561.320

2012: \$2.120.000

2013: \$2.120.000

No se condena al pago de salarios, ni reajustes a los mismos, pues el demandante confesó haber recibido oportunamente el salario quincenalmente, durante el tiempo que prestó su servicio.

ii. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA

La relación de las partes estuvo regida por un contrato de trabajo a término indefinido que inició mínimamente 16 de mayo de 2004 -según la información que reporta el documento de fl.30-y finalizó el 13 de septiembre de 2013, día en que la demandada sostuvo reunión con sus trabajadores con miras a suscribir un acuerdo transaccional y definirla continuidad de la prestación del servicio con la suscripción de un nuevo contrato.

La demandada por su parte argumenta que lo exigido fue la afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral. Pero, el demandante expresa que al sentir vulnerados sus derechos con la oferta, se negó a suscribir un nuevo contrato, y al día siguiente le prohibieron el ingreso a las instalaciones de la demandada, entendiendo con ello que fue despedido sin justa causa.

Pues bien, el argumento esgrimido por la demandada no es de recibo para la Sala, estando la empleadora, a lo largo de la relación laboral, llamada a garantizar esa afiliación, carece de fundamento jurídico pretender válidamente radicarla en cabeza del trabajador.

En criterio de la Sala, privar al trabajador del ingreso a la sede en que prestaba el servicio, bajo la imposición ilegal de una obligación en cabeza suya, constituye un despido sin justa causa que da lugar al pago de la indemnización deprecada en la demanda.

Al tenor del numeral 2 del literal a) del art. 64 del CST dicha liquidación debe calcularse con base en 30 días por el primer año de servicios y 20 días por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Por tanto, la indemnización corresponde a 194.89 días, así detallados:

Extremos	N° días indemnización
mayo 16/04 – mayo 15/05	30
mayo 16/05- mayo 15/06	20
mayo 16/06 - mayo 15/07	20
mayo 16/07 - mayo 15/08	20
mayo 16/08 - mayo 15/09	20
mayo 16/09 - mayo 15/10	20
mayo 16/10- mayo 15/11	20
mayo 16/11 - mayo 15/12	20
mayo 16/12- mayo 15/13	20
mayo 16/13 – septiembre 13/13	4.89

La demandada adeuda por este concepto la suma de **\$13.772.292**, teniendo como salario base día \$70.667.

En ese sentido se **modificará** la sentencia recurrida.

iii. VACACIONES, PRIMA, CESANTÍAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS, INDEMNIZACIÓN POR NO PAGO DE INTERESES A LAS CESANTÍAS, POR NO CONSIGNACIÓN A UN FONDO DE CESANTÍAS, SANCIÓN POR NO PAGAR LAS PRESTACIONES ADEUDADAS A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO E INDEXACIÓN DE LA CONDENA.

Vacaciones

Disponen los numerales 1° de los arts.186¹⁶ y 192¹⁷ del CST, que el trabajador tendrá derecho a 15 días hábiles de descanso por cada año de servicios prestado. No prescribieron las vacaciones causadas desde el 29 de noviembre de 2009, pues el empleador puede ordenar su disfrute hasta incluso un año después de su causación, no pudiendo entenderse prescritas si no desde la fecha en que el empleador pudo haber ordenado el disfrute.

Se causaron 56.87 días de vacaciones,¹⁸ equivalentes a **\$4.018.832**, teniendo como salario base día \$70.667.

Se **modificará** la sentencia recurrida en ese punto.

Primas de Servicio

El primer inciso del art. 306 del CST, prevé que *“el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado”*.

No prescribieron las causadas desde el 29 de noviembre de 2010.

Se causaron 83.75 días de prima,¹⁹ equivalentes a **\$5.309.937**, así discriminados:

año	Salario devengado	Salario día	días de prima	Prima adeudada
2010	\$1.561.320	\$52.044	2.67	\$138.957
2011	\$1.561.320	\$52.044	30	\$1.561.320
2012	\$2.120.000	\$70.667	30	\$2.120.000
2013	\$2.120.000	\$70.667	21.08	\$1.489.660

¹⁶ Art. 186. Numeral 1. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.

¹⁷ Art. 192 numeral 1. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras.

¹⁸ 1.33 días en 2009, 15 en 2010, 15 en 2011, 15 en 2012 y 10.54 en 2013.

¹⁹ 2.67 días en 2010, 30 en 2011, 30 en 2012 y 21.08 en 2013.

Se **modificará** la sentencia recurrida en este punto.

Cesantías

Conforme al art. 249 del CST las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año.

De igual manera, el numeral 1 del art. 99 de la Ley 50 de 1990 dispone que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

Como se indicó, las cesantías no prescribieron siquiera de manera parcial, pues se formuló la demanda el mismo año en que finalizó la relación entre las partes. De ahí que, la demandada adeude al demandante lo causado por ese concepto, desde el 16 de mayo de 2004, pues no aportó prueba de haber consignado en un fondo de cesantías o de manera personal al demandante, suma alguna por ese concepto, por tanto, procede el pago de las cesantías causadas a partir de esa fecha, hasta el 13 de septiembre de 2013.

Adeuda la demandada por este concepto, la suma de **\$10.766.940**, así detallados:

año	Nº días	valor
2004	18.75	\$341.001
2005	30	\$545.601
2006	30	\$545.601
2007	30	\$545.601
2008	30	\$705.789
2009	30	\$1.351.054
2010	30	\$1.561.320
2011	30	\$1.561.320
2012	30	\$2.120.000
2013	21.08	\$1.489.653

En este punto será **modificada** la sentencia recurrida.

Intereses a la cesantía

Dispone el numeral 2 del art. 99 de la Ley 50 de 1990 que “el empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente”.

Prescritos como están los intereses no reclamados con antelación al 29 de noviembre de 2010 (correspondientes hasta 31 de diciembre de 2009, pues los de 2010 se causan a 31 de diciembre de ese año), se liquidan los posteriores.

Adeuda la demandada por este concepto, la suma de **\$754.694**, así discriminados:

año	Vr .sobre el que se liquida	porcentaje	Vr. adeudado
2010	\$1.561.320	12%	\$187.358
2011	\$1.561.320	12%	\$187.358
2012	\$2.120.000	12%	\$254.400
2013	\$1.489.653	8.43%	\$125.578

En ese sentido será **modificada** la sentencia recurrida.

Indemnización por no pago de intereses a las cesantías

El numeral 3° del art.1 de la Ley 52 de 1975 prevé que “si el patrono no pagare al trabajador los intereses aquí establecidos, salvo los casos de retención autorizados por la Ley o convenidos por las partes, deberá cancelar al asalariado a título de indemnización y por una sola vez un valor adicional igual al de los intereses causados”.

Esta indemnización también prescribió en relación con los intereses no reclamados en momento anterior al 29 de noviembre de 2010, por tanto, el valor de la condena asciende a la suma de **\$754.694**.

En ese sentido se **revocará** la sentencia apelada, sin que haya lugar a analizar la buena o mala fe de la empleadora, por tratarse de una indemnización de carácter objetivo.

Sanción por no consignación de cesantías en un fondo

El numeral 3° del art. 99 de la Ley 50 de 1990 consagra que “el valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo”.

La parte demandante en su recurso, reprocha la no imposición de esta sanción, mientras la demandada insiste en que no obró de mala fe, al demostrar que contrató con terceros o al demandante bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios, bajo la creencia de que ese tipo de vinculación era legal y justa.

En torno a la sanción consagrada en la referida norma, el precedente vertical ha sostenido que no es de aplicación automática, sino que está sometida a la buena o mala fe con que haya actuado el empleador incumplido.²⁰

La Sala, contrario a lo sostenido por la A-quo, y por la demandada, no advierte buena fe en la conducta desplegada por ésta, porque, habiendo contratado laboralmente al demandante, en un principio, es decir, durante los años 2004 y 2005, posteriormente dispuso que su vinculación se hiciera a través de terceros o de contratos de prestación de servicios, aduciendo que **de parte el demandante y otros trabajadores se le solicitó un cambio en la modalidad contractual con la finalidad de obtener un mayor ingreso mediante el pago por prenda a trabajada**, sin embargo, tal explicación confirma su mala fe, porque lo procedente era modificar la forma de remuneración de salario que venía por unidad de tiempo, por otra a destajo, lo que no daba lugar a utilizar la intermediación laboral, dado que el personal requerido en instituciones o empresas para el desarrollo de actividades misionales permanentes, no puede estar vinculado a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo otra modalidad contractual que afecte los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores.

El ente accionado incumplió su obligación de reconocer al hoy demandante el carácter subordinado que le era propio, pues, independientemente de la modalidad escogida para contratar con el demandante, la realidad material evidencia que éste prestó su servicio de manera subordinada, atendiendo a los requerimientos, directrices y órdenes de la demandada, por tanto, carece de validez y eficacia la tercerización a través de cooperativas o empresas que obraron como de servicios temporales, para eludir las responsabilidades que como empleadora le atañen.

Bajo estas circunstancias, la conducta de TEÑIDOS Y ACABADOS SAS estuvo desprovista de razones atendibles constitutivas de buena fe y, en esa medida, la sentencia recurrida debe **revocarse** en este punto, para en su lugar reconocerse la sanción moratoria del art.99 de la Ley 50 de 1990.

Tales también son objeto de **prescripción**, por cuanto legalmente no se estableció para ella un término diferente al fijado en los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, ni la jurisprudencia ha interpretado como si lo hace, en asuntos de contornos similares, respecto de la cesantía en cuanto a que, la contabilización del término extintivo se haga a partir de la terminación del contrato de trabajo.

De manera específica, los tres años de prescripción para la sanción moratoria del art.99 de la Ley 50 de 1990 inician el 15 de febrero de cada anualidad para reclamar

²⁰ Ver entre otras las sentencias SL 5418 DE 2019, SL.223 de 2019, SL 713 de 2019 en las que hace referencia a la postura sostenida en torno a este tema en sentencias como la SL.6de 2006, SL 25 de 2010 y SL 18849 de 2017, entre otras.

la consignación de la cesantía que no se hizo a más tardar el 14 de febrero, y así sucesivamente va corriendo el término de extinción de la respectiva sanción a cargo del empleador, derivada de no consignar oportunamente la correspondiente cesantía en fondo destinado a ese fin.

Para liquidarla, se tiene en cuenta que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia ha sostenido que:

“...la consignación anual del auxilio de cesantía es una obligación exigible únicamente en vigencia del contrato de trabajo, por ello, la sanción por su no traslado a la sociedad administradora de fondos de cesantías elegida por el trabajador, dentro del plazo legal – 14 de febrero del año siguiente - se causa por cada día de retraso en el deber de consignar, y solo puede liquidarse hasta la fecha de terminación del contrato, pues a partir de esta data, es exigible el pago directo al trabajador de la totalidad de los saldos que por tal derecho y demás salarios y prestaciones sociales se hayan causado en su favor, de cuyo incumplimiento nace la sanción consagrada en el art. 65 del CST”²¹

Adeuda la demandada por concepto de la sanción del numeral 3 del Art. 99 de la Ley 50 de 1990, la suma de **\$83.470.363**, discriminada como se indica a continuación, teniendo en cuenta que la demanda fue formulada el 29 de noviembre de 2013:

Año cesantías	Extremo inicial	Extremo final	salario	Salario día	Vr. sanción
2007 ²²	02/15/08	02/14/09	\$545.601	\$18.187	\$6.547.320
2008	02/15/09	02/14/10	\$705.789	\$23.526	\$8.469.360
2009	02/15/10	02/14/11	\$1.351.054	\$45.035	\$16.212.600
2010	02/15/11	02/14/12	\$1.561.320	\$52.044	\$18.735.840
2011	02/15/12	02/14/13	\$1.561.320	\$52.044	\$18.735.840
2012	02/15/13	13/09/13	\$2.120.000	\$70.667	\$14.769.403

Sanción por no pago de liquidación de prestaciones a la terminación del contrato

Dispone el numeral 1 del art. 65 del CST:

“Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador

²¹ SL.223 de 2019, haciendo cita y posterior transcripción de la SL.11 de 2000
²² Podía reclamar su pago a partir de febrero 15 de 2008, hasta el 14 de febrero de 2011, cuando hubiera prescrito.

deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero”.

Esta es una sanción cuya imposición, al igual que la anterior, depende de la buena o mala fe de la empleadora, mala fe, que por lo ya expresado, se encuentra suficientemente acreditada, puesto que el intento de transacción confirma que la empresa conocía de las anomalías en que incurrió y de ser cierta su buena fe habría consignado a órdenes del juzgado laboral de reparto lo que estimara adeudar al trabajador demandante por los derechos mínimos e irrenunciables establecidos en las normas sustantivas del trabajo, o al menos las primas de servicio y auxilio de cesantías, conceptos por cuya falta de pago, o mora se genera sanción prevista en el art. 65 del C.S.T., de ahí que, procede **revocar** la sentencia de primera instancia en este aspecto.

La demandada TEÑIDOS Y ACABADOS SAS pagará al demandante por este concepto la suma de **\$50.880.240**, por los primeros veinticuatro (24) meses posteriores a la terminación del contrato. A partir del 14 de septiembre de 2015, se están causando intereses en los términos de la norma trascrita.

De otra parte, se duele el demandante de que la indexación ordenada por la A-quo fuera liquidada por el despacho sin disponer que su causación se presenta hasta el día en que se verifique el pago de lo adeudado. Debe decirse que, salvo en el caso de la sanción del art. 65 del CST, la imposición de pago de sumas fijas de dinero, cuyo valor con el transcurso del tiempo sufre depreciación, por la pérdida de su poder adquisitivo, hecho notorio en Colombia, y teniendo derecho el acreedor a recibir lo adeudado en su valor real, es razonable, como establece la doctrina y la jurisprudencia que se ordenara la reparación de la pérdida de poder adquisitivo de las demás condenas, debiendo **modificarse** la decisión de primera instancia en ese aspecto.

iv. COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

Considera la parte demandante que la conducta engañosa en que incurrió la demandada al contratar al demandante a través de terceros o incluso a través de contratos de prestación de servicios, implica la obligación para esa entidad, de

efectuar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones - SGSSP-.

La sentencia recurrida será **revocada** en cuanto absolvió de esta pretensión a la demandada, pues si bien ante Protección S.A. por ese concepto, las diferentes personas jurídicas por quienes figuraba afiliado el demandante, hicieron algunos pagos a la seguridad social, no se sufragaron durante todos los ciclos, ni sobre el valor realmente devengado por el trabajador, lo que a futuro afectará el cálculo de su pensión de vejez, situación que debe conjurar la judicatura garantizando el pago de lo que realmente se adeuda por tal concepto.

En ese sentido, se ordenará a la demandada, solicitar ante Protección S.A. una certificación de cotizaciones efectuadas en favor del demandante desde el 16 de mayo de 2004 hasta el 13 de septiembre de 2013, identificando el ciclo y el valor tenido como IBC en cada oportunidad. Así mismo solicitará ante ella la elaboración de un cálculo integral teniendo en cuenta la diferencia insoluta de entre los IBC reportados y los salarios acreditados en el proceso, para que, una vez efectuada la liquidación, proceda a pagarlo en el término de treinta (30) días siguientes a su firmeza.

III. EXCEPCIONES

Quedan resueltas implícitamente las excepciones formuladas por la demandada. La de prescripción operó parcialmente respecto de algunos derechos, como se dejó indicado.

IV. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo de Teñidos y Acabados Asociados S.A.S. por haber resultado vencido en el recurso. Se tasa como agencias en derecho, la suma de \$11.000.000.

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, REVOCAR, ADICIONAR y MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutive de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, el 13 de agosto de 2015, dentro del proceso ordinario

laboral de primera instancia promovido por STEVEN ZEA PALACIO contra TEÑIDOS Y ACABADOS ASOCIADOS S.A.S., en el que fueron integradas como litisconsortes necesarias por pasiva COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES CTA "COOPISER CTA", VISION HUMANA COLOMBIA S. A. S. y JUSTIME SERVICIOS S.A.S.

Dicho numeral quedará así:

Declarar que entre STEVEN ZEA PALACIO y TEÑIDOS Y ACABADOS ASOCIADOS S.A.S. existió una relación laboral regida por un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 16 de mayo de 2004 y el 13 de septiembre de 2013, cuando finalizó por decisión unilateral de la empleadora, adoptada sin justa causa.

Adeuda la demandada al demandante, las siguientes sumas de dinero:

- **\$13.772.292** por concepto de indemnización por despido sin justa causa,
- **\$4.018.832** por concepto de vacaciones,
- **\$5.309.937** por concepto de primas de servicio,
- **\$10.766.940** por concepto de cesantías,
- **\$754.694** por concepto de intereses a la cesantía,
- **\$754.694** por concepto de indemnización por no pago de intereses a la cesantía,
- **\$83.470.363** por concepto de sanción por no consignación de cesantías a un fondo,
- **\$50.880.240** por concepto de sanción por no pago de liquidación de prestaciones a la terminación del contrato. A partir del 14 de septiembre de 2015, deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando el pago se verifique.

Estas sumas de dinero, con excepción de la sanción impuesta por el no pago de liquidación de prestaciones a la terminación del contrato, se indexarán a la fecha en que se haga efectivo el pago de lo adeudado.

SEGUNDO: TEÑIDOS Y ACABADOS ASOCIADOS S.A.S. solicitará ante Protección S.A. una certificación de cotizaciones efectuadas a favor del demandante desde el 16 de mayo de 2004 hasta el 13 de septiembre de 2013, identificando el ciclo y el valor tenido como IBC en cada oportunidad. Así mismo solicitará ante ella la elaboración de un cálculo integral teniendo en cuenta la diferencia insoluta de entre los IBC reportados, frente a los salarios acreditados en el proceso, para que, una vez efectuada la liquidación, proceda a su pago, en el término de treinta (30) días siguientes a su firmeza.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fija como agencias en derecho la suma de \$11.000.000

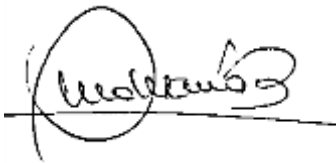
Se ordena notificar por estados y enviar copia de esta decisión a los respectivos correo electrónicos suministrados por los apoderados de las partes.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que la anterior sentencia
fue notificada por ESTADOS N°15
fijados hoy 1° de febrero de 2021
a las 8:00AM

El secretario